



El hecho político
de 2024

Pedro Medellín Torres

El fracaso de los activistas

Pocas veces en la historia reciente un gobierno había cerrado un año en medio de semejante tormenta. Al terminar 2024, ha quedado en evidencia el fracaso de la principal apuesta presidencial: nombrar ministros activistas, en lugar de tecnócratas. En cuestión de meses, al gobierno Petro se le han ido cayendo los más importantes programas de su agenda social. La impericia en el manejo de los asuntos públicos, el desconocimiento de los procesos administrativos, jurídicos y presupuestales y la sobreideologización de las decisiones han llevado a una parálisis del aparato público clave para Petro. Y en los casos de los ministerios e institutos conducidos por gente con la experiencia y el conocimiento, han sido los retrasos en los giros del presupuesto o la excesiva lentitud en las aprobaciones de los programas de caja o la falta de dinero que ha impedido producir los resultados que el Gobierno había prometido.

Al finalizar 2024, el balance de los activistas no podría ser peor:

1) Cuando prometió una reforma que acercara los servicios de salud a la comunidad y propiciara el tránsito a un modelo que privilegia la salud como derecho y no como negocio, lo que ha logrado en estos 28 meses de gobierno es profundizar la crisis de financiamiento del sistema, forzando el cierre de servicios y la reducción de la oferta que lo tiene camino del colapso. La intervención del Gobierno en las EPS antes que resolver los problemas, los ha agravado aún más.

2) Al ministro de Educación se le está descolgando el sistema educativo por la falta de política sectorial. Los problemas de calidad y pertinencia del sistema se agravan, especialmente en la educación superior. Por cuenta de una reforma estatutaria que no se requería, del sainete de la “constituyente universitaria” y de los retrasos en los pagos o los recortes presupuestales tienen en crisis al Icetex y están reventando a las universidades públicas y privadas.

3) En energía, el discurso presidencial ha desbordado la capacidad política e institucional de su equipo ministerial para poner en marcha la transición energética. En 28 meses de gobierno se ha logrado parar la dinámica que traía la industria petrolera, se ha puesto a Colombia a depender del gas que se pueda importar, y en energía eléctrica tiene al país al borde de un apagón. Eso sin contar con el ‘guinness récord’ de haber hundido a Ecopetrol en la peor de las condiciones técnicas, administrativas y financieras.

La falta de criterio en la priorización del gasto y en la contratación por parte de los activistas, sumado a las sobreestimaciones de ingresos y la reducción en los ingresos por la recesión económica, explican buena parte de los problemas fiscales que tienen al Gobierno con problemas para cumplir el pago de las obligaciones de sus entidades con los funcionarios y contratistas. Tanto que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que para 2025 se requiere un ajuste fiscal de \$ 52 billones (2,9 % del PIB) para cumplir con la regla fiscal respecto del presupuesto general de la nación 2025.

Es tan evidente el contraste con los activistas, que la responsabilidad con que la tecnocracia de Minhacienda ha manejado el ajuste fiscal, en particular con el Fondo de Combustibles, ha permitido controlar un problema que amenazaba la economía. Además, las inversiones que comienza a hacer el Gobierno, así como el éxito del Banco de la República en el control a la inflación, han permitido a la economía colombiana entrar en una ruta de la reactivación que llevó el PIB a crecer en 2024 al 1,8 %, cuando se esperaba el 0,9 %. Y la inflación al 5,1 %, cuando se esperaba algo más de 6 %.

Sin embargo, lo que el activismo hace con la mano lo borra con el codo. Aumentar el salario mínimo varios puntos por encima de la suma de la inflación y la productividad amenaza con afectar el objetivo de llevar el PIB al 2,6 % en 2025, con una inflación del 3,6 %. Lo dicho. Los activistas solo son buenos para hacer ruido en la calle. No para gobernar.

“

El desconocimiento de los procesos administrativos, jurídicos y presupuestales y la sobreideologización de las decisiones han llevado a una parálisis del aparato público clave para Petro.